

En defensa del empresario español

En un contexto de creciente polarización política en España, el debate público ha ido derivando hacia posiciones cada vez más extremas, donde el matiz escasea y el enfrentamiento se convierte en estrategia. En ese clima, parece imposible cualquier acuerdo, pese a los muchos asuntos que a todos nos irían mucho mejor si se sustituyese el recurrente 'y tú más' por un consenso nacional básico en beneficio de la sociedad.

La figura de la empresa no escapa a este maximalismo de bloques ideológicos, que está llevando a la destrucción de un pilar fundamental de nuestra Consti-

tución como es el diálogo social y a que empresarias y empresarios sean señalados por algunos sectores como símbolo de desigualdad y privilegio, alimentando un discurso que simplifica una realidad mucho más compleja. Se ha instalado de forma preocupante una narrativa que estigmatiza al tejido productivo y cuestiona su papel en la sociedad, como si la actividad fuese un obstáculo y no un pilar del bienestar colectivo. Este enfoque no solo distorsiona la realidad económica del país, sino que erosiona la confianza en uno de los motores de nuestra prosperidad.

Instituciones del ámbito empresarial, como CEOE y las Cámaras de Comercio constatamos cada día cómo se utiliza la figura del empresario como arma arrojadiza del debate ideológico.

España no puede permitirse discursos que criminalizan a quienes sostienen nuestra economía. Atacar al empresario se ha convertido en un recurso fácil para quienes prefieren el aplauso ideológico al rigor económico. Pero la realidad es tozuda: sin empresarios no hay empleo, sin empleo no hay cotizaciones, y sin cotizaciones no hay Estado del bienestar.

Es profundamente irresponsable utilizar un lenguaje propio del siglo XIX para describir la realidad productiva del siglo XXI. Demonizar al que invierte, al que arriesga su patrimonio, al que crea una empresa y paga nóminas no es justicia social; es populismo.

España compite en un entorno global. La inversión no entiende de consignas, sino de seguridad jurídica, estabilidad normativa y respeto institucional. Cada declaración que siembra desconfian-

za, cada reforma improvisada, cada ataque retórico contra el tejido empresarial es un mensaje que espanta capital, frena proyectos y destruye oportunidades.

La riqueza no cae del cielo. Se crea. Y la crean nuestros autónomos, nuestras pymes, nuestras empresas familiares y nuestras grandes compañías. Son ellas las que financian con sus impuestos la sanidad, la educación y las políticas sociales que todos defendemos. Insultarlas mientras se depende de su contribución es incoherente.

El deber de un Gobierno no es buscar culpables imaginarios. Es garantizar reglas claras, estabilidad y crecimiento. Es facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la calidad de la sanidad y asegurar una educación competitiva. Es gestionar, no confrontar.

Quien ataca al empresario español no ataca a una élite abstracta: ataca al comerciante de barrio, al agricultor, al industrial, al joven emprendedor que intenta sa-

car adelante un proyecto. Ataca, en definitiva, a millones de españoles que trabajan para construir un país mejor.

España necesita menos demagogia y más responsabilidad. Menos enfrentamiento y más reformas serias. Menos consignas y más crecimiento. Porque la prosperidad no se impone por decreto: se construye con esfuerzo, in-

«La prosperidad no se impone por decreto: se construye con esfuerzo, inversión y libertad económica dentro de un Estado de derecho fuerte»

versión y libertad económica dentro de un Estado de derecho fuerte. Y eso, es lo que debemos defender.

Jorge Villarroya Greschuhna es presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza; Benito Tesier Sierra es presidente de CEOE Aragón